

Revueltas populares y cambio político en América Latina

Popular Revolts and Political Change in Latin America

Sergio Tamayo

UAM-Azacapotzalco

sergiotamayo561006@gmail.com

RESUMEN

El artículo aborda el tema de las revueltas populares y sus posibles efectos sobre los regímenes políticos. La pregunta que se destaca es: ¿los movimientos sociales institucionalizan y estabilizan el sistema, o son necesarios para generar cambios significativos?

Análiticamente, con base en la metodología del Protest Event Analysis, se argumenta la existencia de movimientos populares y sus resonancias recíprocas tanto en regímenes progresistas como neoliberales de América Latina, que constituyeron un ciclo de protestas a finales de 2019.

El contexto es esencial, específicamente el embate de una extrema derecha que se apoya e impone desde el centro de comando de los Estados Unidos hacia América Latina. En este tenor, se comparan las llamadas revoluciones populares de 2019: la revolución de los zánganos de Ecuador; la revolución de los 30 pesos de Chile y las protestas de la whipala en Bolivia. Se hace énfasis en algunas categorías que permiten comprender la complejidad de estas rebeliones.

ABSTRACT

The article addresses the issue of popular revolts and their effects on the political regime. The question that stands out is: Do social movements institutionalize and stabilize the system, or are they necessary to generate significant changes?

Empirically, through the Protest Event Analysis, we argue the existence of popular movements and their reciprocal resonances in the progressive and neoliberal regimes of Latin America, which constituted a cycle of protests at the end of 2019.

The context is decisive, specifically the onslaught of an extreme right that is supported and imposed from the command center of the United States, towards Latin America. In this context, the so called lazy revolution of Ecuador is compared; the 30 pesos revolution in Chile; and the whipala protests of Bolivia. Emphasis is placed on some categories that allow us to understand the complexity of the October 2019 revolution.

PALABRAS CLAVE

progresismo, movilización popular, Revolución de los zánganos, Protestas de la Whipala, Revolución de los 30 pesos.

KEYWORDS

progressivism, popular mobilization, Revolution of the lazy, Protests of the Whipala, Revolution of the 30 pesos.

INTRODUCCIÓN¹

El tema de las revueltas populares y sus efectos sobre los regímenes progresistas del siglo XXI puede abordarse desde varias interrogantes: ¿los movimientos sociales institucionalizan y estabilizan el sistema, o son necesarios para generar cambios significativos? Los enfoques institucionalistas reducirían la capacidad de los movimientos en el cambio político, mientras que las perspectivas revolucionarias exaltarían su potencialidad. Las tendencias hegemónicas de los últimos 30 años han desplazado la viabilidad revolucionaria de los movimientos sociales, a partir de experiencias cotidianas de contestación política, despojándolos del papel que pueden desempeñar en la disputa por el poder. Las críticas de la modernidad han sustituido la lucha de clases como contradicción irresoluble del sistema por conflictos pospolíticos y de mitigación de contradicciones cotidianas (Beck, 2011a, 2011b). Se han mantenido estas suposiciones, muy a pesar de que recientemente se hayan expuesto enfrentamientos que reflejan aún las fuertes discordancias fundadas en las desigualdades estructurales del sistema, como fueron los casos del 11M de España, los chalecos amarillos y los movimientos obreros en Francia, las movilizaciones electorales en Grecia, el 99^o de las registradas en los Estados Unidos, la primavera árabe en más de 10 países del Medio Oriente y las grandes movilizaciones feministas en todo el mundo. A pesar de ello, para las nuevas teorías del fin de la historia, los grandes enfrentamientos históricos habrían dado paso al choque entre civilizaciones, evidenciando importantes diferencias culturales entre el totalitarismo fundamentalista y las incólumes democracias occidentales. Los conflictos sociales, y si acaso los movimientos, serían en esta visión resultado de ciertos desajustes del sistema, que pueden resolverse inyectando recursos y readaptando nuevamente a los quejosos. En general, las exigencias de los movimientos son pensadas como demandas por la inclusión.

En contraparte, existen varios autores que, incluso con diferencias teóricas sensibles, deberíamos tomar en cuenta como referencia para pensar hasta qué punto las revueltas populares tienen un efecto directo en el cambio político y no únicamente como mecanismos de institucionalización. En este sentido, Charles Tilly (1995, 2006, 2008) analiza la relación entre lo social y lo político, así como la correspondencia entre la protesta y los regímenes políticos. Sydney Tarrow (1998), por su parte, examina el vínculo de los movimientos sociales con el poder. Ambos autores, situados en la gran escuela estadounidense de la movilización de recursos, han insistido con cierta autonomía sobre la per-

1 Agradezco la colaboración de la socióloga Alitzel Cruz, en la búsqueda y organización de la información que constituyó el catálogo de eventos contenciosos para este trabajo

tinencia de los procesos políticos y la relación intrínseca entre la dinámica de los movimientos y el carácter eminentemente político de la contestación, lo que les ha permitido abrir horizontes teóricos y observar tanto procesos de institucionalización como de cambio político. Immanuel Wallerstein (1996) y Giovanni Arrighi estudiaron, como derivación del sistema mundo y los ciclos globales económicos, los alcances antisistémicos de movimientos nacionales y sociales. A partir de una cierta interpretación de la dependencia, identificaron las fortalezas y limitaciones de los movimientos nacionales antiimperialistas, y equipararon las expresiones locales de la lucha de clases con los movimientos sociales. Con una perspectiva gramsciana y del marxismo crítico, Massimo Modonesi (2016) define a los movimientos sociales políticos en el campo del antagonismo. El proceso para que un movimiento adquiriera el carácter antagónico pasa por fases de subjetivación política, que van desde el campo de la subalternidad, la dominación y la resistencia, a la formación de movimientos sociopolíticos cuyo carácter antagónico permite ser parte de la lucha de clases y de los actores de cambio. El cambio, sin embargo, no es teleológico, sino dialéctico y puede ser reactivo hasta desembocar nuevamente en las arenas pantanosas de la resubalternización. Así, Ernesto Laclau (2003) sitúa el paso de las identidades colectivas locales y reivindicativas a la formación de movimientos sociales abarcadores y enmarcados en la transformación societal. El proceso no es ni espontáneo ni determinista, es político y cultural, situado en procesos paradójicos de subjetivación política que buscan rebasar los obstáculos del localismo para posicionarse en una representación universal.

La intención de esta reflexión a manera de línea de investigación es encontrar los puntos de conexión entre acción colectiva y procesos políticos, desde una visión crítica de los movimientos sociales. Analíticamente, podemos argumentar la existencia de movimientos populares y sus resonancias en la formación de regímenes progresistas de América Latina. Un progresismo que se mantuvo con vaivenes y diferencias durante más de 15 años en Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Nicaragua y El Salvador, pero que a partir de 2015 y en especial 2018 vio el comienzo de su decadencia, al punto que una de las más importantes especialistas en el tema, Maristella Svampa (2019), plantea el fin de los progresismos en América Latina, precisamente en el momento en que México, quizá tardíamente, entraba en esta fase.

Con los últimos cambios y movilizaciones populares en varios países, como el gobierno de extrema derecha en Brasil, el retorno del populismo en Argentina, el golpe de Estado en Bolivia, las protestas masivas contra el gobierno neoliberal de Chile, el impacto cualitativo del movimiento indígena y urbano popular en Ecuador, la nueva experiencia mexicana del llamado pro-

gresismo tardío, así como el embate generalizado de una extrema derecha que se apoya e impone desde el centro de comando de los Estados Unidos, en este contexto podríamos adelantar al menos dos hipótesis: 1) que aún es anticipado señalar el fin de los progresismos en AL y 2) que el fin de los progresismos, en todo caso, no es un proceso natural, sino resultado de una lucha encarnizada por el poder desde nuevas fuerzas de derecha y extrema derecha.

En la comparación de las experiencias de movilización en Ecuador, Bolivia y Chile habría que señalar algunas premisas sobre las cuales entendemos las diferencias entre los regímenes llamados progresistas y los neoliberales. El progresismo es un sistema característico del siglo XXI en América Latina que busca el retorno de una economía mixta, la idealización del Estado de Bienestar que se instaló en el periodo de entreguerras del siglo XX para generar un nuevo pacto social que permitiese una mayor participación del Estado en la economía, equilibrando el mantenimiento del libre mercado en las estrategias de desarrollo. Los progresismos no son anticapitalistas, sino antineoliberales. En las condiciones de subdesarrollo de la región, el modelo económico se basa en el extractivismo de los llamados *commodities*. Al final, como dice David Harvey (2006), el extractivismo se instala como una forma de acumulación de capital por despojo.

Ahora bien, ¿la etapa de los progresismos se ha agotado? ¿Podemos hablar del fin del progresismo en América Latina? Distingamos desde un análisis de la economía política a ciertos grupos de países caracterizados por el tipo de régimen (*cfr.* Gaudichaud, Webber y Modonesi, 2019):

1. Tenemos por un lado a un conjunto de países como Colombia, México (antes de 2018) y Chile, impulsados por regímenes neoliberales de derecha.
2. También están las experiencias de un grupo de países como Brasil (en la era de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, antes de Temer y Bolsonaro) y Uruguay (con José Mujica) ubicados en la centro-izquierda. Igualmente, podríamos situar a Argentina y Nicaragua, identificados con el populismo de izquierda.
3. Finalmente, estaría el grupo de países con una postura más radical, como Venezuela, Ecuador (en la era de Rafael Correa) y Bolivia (de Evo Morales), definidos como Estados neodesarrollistas, donde la movilización popular se ha articulado en torno a la llamada revolución bolivariana venezolana, la revolución ciudadana ecuatoriana y el nuevo Estado plurinacional de Bolivia.

¿Qué hace la diferencia entre estos países neoliberales y progresistas de diferente tipo? Posiblemente una respuesta sería la movilización popular y las resonancias históricas particulares sobre el perfil de los regímenes políticos. Pero en esta distinción podemos ubicar una noción que explicaría las revueltas o la institucionalización de los progresismos. La institucionalización es una manera de explicar el concepto de revolución pasiva en el contexto del progresismo. La revolución pasiva, de acuerdo con Modonesi (2017) desde un enfoque gramsciano, identifica a aquellos regímenes populistas a partir de cuatro características principales en relación con los movimientos populares: 1) La llegada al poder de un nuevo bloque hegemónico apoyado por la movilización popular. 2) Este nuevo régimen tiene como objetivo el transformismo, es decir, transformar las condiciones extremas de desigualdad de los regímenes anteriores y sustituirlos por una nueva conducción a través de la movilización *institucionalizada* de sectores populares. 3) Lo anterior significa en la práctica un proceso de pacificación de las protestas y control de los movimientos surgidos en la etapa previa de lucha por el poder. 4) La existencia de liderazgos fuertes y carismáticos (como, por ejemplo, Evo Morales, Hugo Chávez, Rafael Correa, José Mujica, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Andrés Manuel López Obrador). Esta particularidad se explica también desde el análisis del bonapartismo (Marx, 1979; Trotski, 1987) o cesarismo (Gramsci, 2009; *cfr.* Nogueira, 2004; Portelli, 1992; Anderson, 1978; Betancourt, 1990) para identificar líderes que surgen en momentos de crisis y se sitúan por encima de las clases sociales en pugna, manteniendo un cierto equilibrio y estabilización política y social.

En este contexto y retomando algunas referencias teóricas previamente expuestas, podemos describir la llamada revolución de los zánganos de Ecuador, que comenzó el 3 de octubre, la revolución de los 30 pesos de Chile del 18 de octubre y las protestas de la whipala de Bolivia, a partir del 20 de octubre de 2019, haciendo énfasis en algunas categorías que nos pueden ayudar a comprender la su complejidad. El orden de exposición de cada experiencia parte de una síntesis del entorno político, seguida del contexto en el que se manifestó el agravio social. Se puntualizan las movilizaciones, siguiendo más o menos un recuento cronológico, en función de las reacciones políticas y policiacas de las autoridades. Finalmente, se señalan algunas consecuencias y trayectorias que el conflicto podría seguir después de diciembre de 2019.

Para el análisis, elaboramos un catálogo de eventos contenciosos para cada país, a partir de la revisión de aproximadamente 195 notas periodísticas de diversos periódicos nacionales y asociaciones de prensa internacionales como Reuters, CNN y Associated Press. Se destacan los agravios, los repertorios de la movilización y los principales actores sociales y políticos protagonistas. Parte

del análisis e interpretación de algunos hechos significativos no pretende alcanzar la neutralidad política en la descripción de la dinámica de las acciones, sino la de identificar una posición crítica desde las movilizadas y los movilizadores, a través de la revisión que proviene de órganos de difusión de asociaciones y organizaciones sociales, así como de artículos de opinión de activistas políticos, expuestos en el catálogo de eventos. La metodología sigue la propuesta de trayectoria de eventos contenciosos de Charles Tilly (2011) y del *Relational Event Analysis* (Análisis Relacional de Eventos), de Takeshi Wada (2004, 2019).

Después de la parte descriptiva se abre un apartado final de reflexión, en el que se recalcan aquellos mecanismos de las acciones analizadas, definiéndose estas como revueltas por la dignidad, en tanto sugerencia de investigación a futuro, repensando algunas de las líneas teóricas correspondientes.

ECUADOR Y LA REVOLUCIÓN DE LOS ZÁNGANOS²

El 1 de octubre de 2019, Lenín Moreno anunció un paquete de reformas económicas, conocido como “el paquetazo”, en el cual se retiraban los subsidios al combustible, el alza fue de casi 100% en el diésel y con ello el incremento al costo del transporte, los pasajes urbanos e interprovincias y de transporte pesado. Al día siguiente, el 2 de octubre, taxistas, transporte pesado y de pasajeros, de escolares, institucionales, de turismo y grúas, que integraban las federaciones de transporte del país, anunciaron un paro nacional como medida para exigir la derogación del decreto. No obstante estas acciones, tres días después los transportistas movilizadores levantaron la huelga, afirmando la existencia de acuerdos con el gobierno y la suspensión de la política de retiro

- 2 Las revueltas en Ecuador fueron analizadas en un estudio de prensa en varias fuentes, con las que se realizó un catálogo de eventos contenciosos (Cfr. Sobre la metodología, véase a Tilly, 2011; Wada, 2004, 2019). Aquí solo presentamos algunas referencias pertinentes por razones de espacio, a partir de las cuales se hizo la descripción del episodio: CNN Chile, (3 de octubre de 2019), “Ecuador declaró estado de excepción en medio de protestas por eliminación de subsidios a combustibles”, recuperado de https://www.cnnchile.com/mundo/ecuador-declaro-estado-de-excepcion-en-medio-de-protestas-por-eliminacion-de-subsidios-a-combustibles_20191003; Actualidad RT, (7 de octubre de 2019), “La ‘revolución de los zánganos’ intensifica protestas en Ecuador contra el ‘paquetazo’ de Lenín Moreno”, recuperado de <https://actualidad.rt.com/actualidad/329531-ecuador-quinto-dia-protestas-contra-paquetazo>; Ap, Dpa, AFP, Reuters y Sputnik, (9 de octubre de 2019), “Reprimen a indígenas que desafiaron el toque de queda en Ecuador”, recuperado de <https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/10/09/reprimen-a-indigenas-que-desafiaron-el-toque-de-queda-en-ecuador-6539.html>; AFP, Reuters, Ap y Europa Press, (14 de octubre de 2019), “Acuerdo en Ecuador pone fin a la rebelión indígena”, recuperado de <https://www.jornada.com.mx/2019/10/14/mundo/024n1mun>; Actualidad RT, (23 de octubre de 2019), “Movimiento indígena de Ecuador suspende diálogo con el Gobierno de Lenín Moreno”, recuperado de <https://actualidad.rt.com/actualidad/331267-movimiento-indigena-ecuador-suspende-dialogo-gobierno>.

de subsidios. Los antecedentes de lo decretado por Lenín Moreno se remontan al 21 de marzo, cuando el gobierno anunció que había logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El efecto del decreto, en términos de la emergencia de una amplia participación de ciudadanos, fue extraordinario. Para el 3 de octubre se habían realizado multitudinarias protestas. Estas fueron respondidas por las autoridades con la intervención de la policía, que derramó gases lacrimógenos. Hubo decenas de heridos. Ante esto, el gobierno declaró inmediatamente el Estado de excepción. De ahí en adelante, las políticas erráticas del presidente no se hicieron esperar, desde decretar toque de queda en la ciudad de Quito, incrementar la represión a las manifestaciones, inducir la represión selectiva para detener a líderes sociales, cambiar la sede del Gobierno Central de Quito a Guayaquil, hasta aprobar acuerdos con organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que después no fueron cumplidos. El gobierno, mientras tanto, denunciaba la preparación de un golpe de Estado por el grupo de Rafael Correa, fustigado por la intervención del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Entre tanto, varios dirigentes de la CONAIE anunciaron un paro indefinido y, de ser necesario, la toma de la Asamblea. Los indígenas organizaron una gran marcha hacia Quito para exigir la renuncia de Lenín Moreno, el actual presidente, quien había sido vicepresidente a lo largo de las dos administraciones del propio Rafael Correa. Este último, considerado el líder de lo que se conoció como Revolución Ciudadana Ecuatoriana, habría tenido una orientación clara hacia lo que se presentó en América Latina como el camino al socialismo del siglo XXI, así como el mantenimiento de una política exterior bolivariana, alineándose a los aires de la revolución chavista. En este contexto de división de proyectos y confrontación con quien habría sido un colaborador de Correa, pero que después se apegó abiertamente a las políticas neoliberales, se estableció una alianza entre la CONAIE y el FUT, que llamó a una huelga nacional.

Durante la huelga general del 9 de octubre, la CONAIE efectuó una manifestación de más de 50 mil personas en la ciudad de Quito, a la que se le conoció como el Día del cacerolazo. Ante esta, el gobierno respondió violentamente. Hubo siete muertos, de los cuales uno era recién nacido. Dos dirigentes regionales de la CONAIE fueron asesinados, más de 500 heridos, 95 graves, 83 desaparecidos, de los cuales 47 eran menores de edad, más de 800 detenidos, la mayoría se encontró en recintos policiales y militares, 57 periodistas agredidos por la policía, 13 periodistas encarcelados, nueve medios de comunicación intervenidos y 26 políticos apresados. Además, se reportó la detención arbitraria de 14 ciudadanos venezolanos que aparentemente no participaban en las protestas.

Finalmente, y bajo presión social, el 14 de octubre, Moreno derogó el paquete de ajustes económicos del llamado decreto 883. Entonces creció el júbilo en las calles; miles de personas se concentraron en el parque El Arbolito, punto de reunión del movimiento indígena. ¡Sí se pudo, sí se pudo!, coreaban las y los manifestantes, y se abrazaban con los policías luego del anuncio. Lenín Moreno regresó a la capital y junto con dirigentes comunitarios “ensayó una negociación con la mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal” (Francesco Manetto, *El País*, 14 de octubre de 2019).

Fueron 11 días que conmovieron a Ecuador. Decenas de marchas en las grandes ciudades y paralización de las principales carreteras del país. El eje vertebral lo tuvo la caravana de los indígenas hacia Quito, que ocurrió como en oleadas, desde la sierra y desde la zona oriente hacia la capital. Otro sector social poderoso fueron los pobladores de barrios populares, quienes también descendieron sobre Quito, organizados por *correístas* y acusados de “violentos”, con la supuesta intención de extender la idea de criminalizar la protesta. La represión en respuesta fue en aumento, pero la movilización, en vez de disminuir, crecía más. El efecto pernicioso de la represión en los movimientos sociales puede paralizar o detonar el conflicto. Ni el Estado de excepción ni el toque de queda detuvieron la movilización de masas.

No obstante, después del júbilo llegó otra realidad. A pesar del acuerdo alcanzado, la policía descargó detenciones arbitrarias a activistas populares y allanaron domicilios, como el de Paola Pabón, para algunos de los grupos movilizados una de las voces más críticas de Lenín Moreno. Y el gobierno incumplió al posponer el diálogo con los trabajadores que tenían como objetivo revisar las reformas laborales. Hacia el 23 de octubre, la CONAIE decidió suspender unilateralmente el encuentro con el gobierno y constituyó lo que llamaron el Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales de Ecuador, con representantes de todas las comunidades. Ahí, el 30 de octubre presentaron una propuesta de reforma económica, aunque sin mayor peso político. Otros intentos de autoorganización no pudieron concretarse. ¿Qué pasó, pues, en Ecuador? Las movilizaciones se autoproclamaron como “la revolución de los zánganos”, en respuesta al propio mandatario, quien un día después de que iniciaran las protestas insistió en que no daría marcha atrás: “Se acabó la zanganería”, habría dicho.

Pese a las grandes movilizaciones y el triunfo popular, este fue un movimiento con objetivos coyunturales específicos contra medidas económicas que no logró avanzar más allá hacia propuestas políticas de autoorganización popular. Con excepción del Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales, que propuso un paquete de reformas económicas sin mucho éxito, las demás iniciativas no prosperaron.

Con todo y que el movimiento se extendió a 21 provincias del país y permitió rearticular sectores organizados, especialmente indígenas y mujeres, para algunos activistas no tuvo, sin embargo, la capacidad de ordenar mejor la espontaneidad de los sectores populares de los barrios, ni de los trabajadores ni de los transportistas. En efecto, el CONAIE y el FUT ocuparon la escena de los transportistas desmovilizados, pero no fue suficiente. Atraieron la solidaridad de estudiantes de distintas universidades (Universidad Central del Ecuador, Escuela Politécnica Nacional, institutos y universidades privadas) que apoyaron con brigadas de salud para mujeres y niños indígenas, y luego se activaron grupos feministas. Finalmente, participaron sectores de clases populares y medias de poblaciones urbanas. Aún, al parecer, la multitud se quedó un paso atrás.

Con todo, las mujeres fueron las que estuvieron en primera fila y a la vanguardia. Se constituyeron, como en muchas partes del continente, en sujeto político que luchaba contra la violencia hacia ellas, contra el feminicidio y por la despenalización del aborto. Su participación tuvo mejores condiciones, así se consideraba, por estar ya movilizadas y vinculadas. Esto les permitió articularse más fácilmente con el movimiento indígena. En el toque de queda fueron las mujeres las que llamaron a no quedarse calladas y a organizar el cacerolazo, en rechazo a la represión y en apoyo al movimiento indígena, obrero y popular.

Ante la radicalización de los sectores populares, un aspecto que se distinguió de esta experiencia fue el papel de la violencia y de la no-violencia para el cambio social, que fue un debate relevante en la revolución de los zánganos. Es un tema que no deberíamos obviar en la reflexión, pues se ha extendido en muchos países. Por un lado, el movimiento logró resistir y la radicalización podría explicar en parte el hecho de que el gobierno haya cedido a la movilización de masas. Por otro, la entrada a la etapa de la negociación fue una experiencia delicada políticamente para los contendientes, especialmente para los movimientos sociales. La estrategia institucional de las autoridades tiende a fragmentar al movimiento. La difícil unidad entre sindicatos y comunidades indígenas (FUT y CONAIE) se vio así desgarrada por la negociación diferenciada por sectores, así como por los restringidos objetivos sectoriales. Laclau (2003) le llamaría el complicado tránsito entre los particularismos de los movimientos y la necesaria universalidad del cambio político contrahegemónico. Ese es el desafío y una línea de reflexión por venir.

CHILE Y LA REVOLUCIÓN DE LOS 30 PESOS³

Sebastián Piñera, presidente de Chile en 2010 y luego en 2018, es un ingeniero, empresario multimillonario y político neoliberal. No obstante, tuvo una amplia legitimidad antes de las revueltas “de los 30 pesos”, con 51% de aprobación en su segundo periodo de gobierno. Sin embargo, a causa del movimiento, algunas encuestas mostraron que su aprobación se habría reducido hasta un 9% y más de 84% lo desaprobaba.

En adición, el contexto de Chile desde 1973 (hace 49 años) ha estado permeado por una cultura de la derecha que se ha sostenido en el poder, producto primero de un golpe de Estado y después de un cambio de régimen. Ha sido una derecha caracterizada por su racismo y misoginia. Algunas encuestas muestran que, pese a todo, la Iglesia católica ha venido perdiendo terreno y la multiplicación en su seno de escándalos de pedofilia, ocultados por la jerarquía, no ha hecho sino profundizar ese descrédito. Diversas sectas evangélicas avanzan en barrios populares y van ocupando un lugar en el espectro de la ultraderecha, como en otros países. Algunos grupos de corte fascista han estado atacando regular y violentamente a feministas, lesbianas y transgénero. Al mismo tiempo, las recomposiciones políticas han favorecido el surgimiento mediático y electoral de personalidades de extrema derecha que denuncian al feminismo como una “ideología de género” y se oponen ferozmente al aborto y a quienes califican de “feministas de cartón”; esta misma ultraderecha alaba a la “verdadera mujer chilena”, imperiosamente católica, nacionalista e impuesta a quedarse dentro del hogar atendiendo labores domésticas y el cuidado de los hijos.

- 3 El análisis de las revueltas en Chile partió de un estudio de prensa de varias fuentes, con las que se realizó un catálogo de eventos contenciosos siguiendo la metodología de Charles Tilly (2011) y Takeshi Wada (2004, 2019). Aquí únicamente presentamos algunas referencias pertinentes, por razones de espacio: Marín Francisco (18 de octubre de 2019), “El alza a la tarifa del Metro detona el estallido social en Chile”, *Proceso*. Recuperado de <https://www.proceso.com.mx/603808/el-alza-a-la-tarifa-del-metro-detona-el-estallido-social-en-chile>; Pablo Retamal Navarro, (22 de octubre de 2019), “Presidente Piñera pide perdón ‘por falta de visión’ y anuncia agenda social con medidas en pensiones, salud, tarifas eléctricas e ingresos”, *La Tercera*. Recuperado de <https://www.latercera.com/politica/noticia/presidente-pinera-pide-perdon-falta-vision-anuncia-agenda-social-medidas-pensiones-salud-tarifas-electricas-e-ingresos/873571/>; AFP, (9 de noviembre de 2019), “Piñera anuncia proyecto para cambiar la Constitución en medio de crisis en Chile”, *El País*. Recuperado de <https://www.elpais.com.uy/mundo/pinera-anuncia-proyecto-cambiar-constitucion-medio-crisis-chile.html>; Aldo Anfossi, (16 de noviembre de 2019), “Firman pacto en Chile por la paz y nueva Carta Magna”. *La Jornada*. Recuperado de <https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/11/16/firman-pacto-en-chile-por-la-paz-y-nueva-carta-magna-9157.html>; Zona Docs, (18 de noviembre de 2019), “Chile: Un mes de protestas, resistencia y represión”. Recuperado de https://www.zonadocs.mx/2019/11/18/chile-un-mes-de-protestas-resistencia-y-represion/?fbclid=IwAR3z-bTPx2mFYH7XltqvnefKu_nMLxPkMotpd2bjjHZ1YHkKa9dVnsPlc_; Hispan tv, (26 de noviembre de 2019) “Chile vive violenta jornada de huelga general progresiva”. Recuperado de <https://www.hispantv.com/noticias/chile/443189/huelga-protestas-pinera>.

En tal contexto, el problema en Chile empezó el 1 de octubre de 2019, cuando el Ministerio de Transportes decretó un alza en los servicios del Metro y Tren Central Alameda-Nos en horario punta y valle. Al parecer, el verdadero conflicto fue el significado de esta medida, que era parte de una sistemática estrategia de privatización de la economía y los servicios públicos chilenos desde la dictadura de Pinochet, en 1973. Este enconado proceso de privatización se ha repetido en la educación y otros servicios sociales. Más aún, la dictadura ha sido un referente simbólico aterrador en la mentalidad de un gran número de chilenos/as, por eso pesó mucho la salida del Ejército a las calles en esta coyuntura, más que cualquier otra medida. La consigna “No son 30 pesos, son 30 años de dictadura” resume muy bien el diagnóstico de los/as jóvenes.

Desde el lunes 7 de octubre, grupos nutridos de estudiantes comenzaron a ingresar en “avalancha” a la estación Universidad de Chile del Metro, en una práctica que repitieron hasta 50 veces y se le conoció como “evasiones masivas”. El 18 de octubre, día que se considera el inicio del movimiento, la respuesta del gobierno fue represiva. Decidió decretar un estado de excepción, el toque de queda en al menos seis ciudades del país, cediendo el control de las calles a los militares, negándose a reconocer a las/los jóvenes como interlocutores y comenzó a definir la agenda y los temas en los medios de comunicación. El presidente aparentó, en algunos discursos, pedir perdón a la ciudadanía por las medidas tomadas, pero –al contrario y sin tolerancia– arremetía con el Ejército contra las manifestaciones juveniles. Impuso así 10 disposiciones de seguridad coercitivas, al mismo tiempo que cancelaba el alza del transporte, aceptó la renuncia de ocho de sus ministros y buscó un pacto con los partidos del Congreso, quienes rápidamente aprobaron un plebiscito para integrar una nueva asamblea constituyente. Además, acusó a Nicolás Maduro de *injerencismo*.

Las manifestaciones (al 1 de noviembre de 2019) arrojaron un saldo de 23 muertos, más de 1,574 heridos en hospitales (473 por disparos de perdigones efectuados por la policía, con más de 157 personas con lesiones oculares irremediables), más de 4,326 detenidos y 132 querellas por tortura y violencia sexual.

Mientras tanto el movimiento crecía día con día. Las concentraciones se registraron en la céntrica Plaza Italia o Baquedano, que fue rebautizada como Plaza de la Dignidad. Las y los jóvenes desafiaron el toque de queda. Poco a poco se fueron sumando estudiantes, jubilados, profesores, funcionarios públicos y miembros de los servicios de salud pública que respondieron al llamado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), así como otra veintena de organizaciones sociales que demandaban al gobierno deponer el estado de emergencia y “devolver los militares a sus cuarteles”, junto a históricas peticio-

nes para mejorar las pensiones, mayores recursos a la salud y a la educación pública, entre otras demandas.

Grupos artísticos organizaron cientos de *performances* simbólicos. Personajes del programa 31 minutos protestaron a su manera, como el conejo periodista Juan Carlos Bodoque que cubría las manifestaciones; el personaje decidió cambiar su logo publicitario en protesta a los carabineros que disparaban balines de goma y lanzó una canción en honor al perro “Matapacos”, que se solidarizó con los jóvenes encapuchados que se apostaban como escudos humanos en la primera línea de las manifestaciones. Los seleccionados chilenos de fútbol se negaron a jugar un partido amistoso ante el equipo de Perú. 30 músicos chilenos reescribieron “El derecho de vivir en paz”, de Víctor Jara: “Los estudiantes no los dejarán dormir, si ustedes no los dejan soñar”. Mon Laferte mostró los senos en símbolo de protesta durante los premios Latin Grammy y dijo que “En Chile torturan, violan y matan”. El grupo Las Tesis concibieron el *performance* “El violador eres tú”, que se hizo no solo viral, sino que fue replicado en decenas de países, desde Chile para todo el mundo.

El viernes 25 de octubre se vivió la máxima expresión en Santiago, cuando un millón 200 mil personas (cifra oficial) se reunió para marchar pacífica y alegremente por la Alameda, la principal avenida de la capital, en una gesta épica multicultural, donde se expresó la diversidad de la sociedad chilena. En muchas otras ciudades, grandes y pequeñas, se repetían las escenas. Mil guitarristas se congregaron frente a la Biblioteca Nacional para interpretar canciones de Víctor Jara, asesinado por los militares en 1983.

Surgió así la propuesta de avanzar por el único camino formal, que era la creación de una nueva Constitución para extirpar la lógica ultramercantilista de la sociedad y la economía chilena, que funcionaba hasta entonces concentrando la riqueza en pocos y generando millones de desplazados. El Bloque Sindical de Unidad Social convocó a una huelga general de trabajadores para el 12 de noviembre (conocida como huelga 12N). Cientos de sindicatos de trabajadores y trabajadoras –de la construcción, de puertos, bancos, comercios y minería, entre otros ramos– participaron a lo largo de todo Chile .

Tras cuatro meses de protesta social, los chilenos consiguieron uno de sus objetivos: votarían si deseaban o no una nueva Constitución. La protesta social podría desterrar una de las principales herencias del pinochetismo.

La revuelta popular en Chile apostó en 70 días de movilización tres demandas fundamentales: una agenda social que combatiera inmediatamente la precarización de la vida; la exigencia de una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente, y el reclamo de justicia y castigo por las violaciones a los derechos humanos. Estas demandas fueron acogidas tanto por espacios formados

al calor de la lucha, como por las Asambleas Territoriales y por entes sociales organizados previamente al estallido del 18 de octubre (Pineda, 2020).

BOLIVIA, LA WHIPALA CONTRA LA ULTRADERECHA SANTACRUCEÑA⁴

El movimiento contra el golpe de Estado en Bolivia surgió a raíz de la elección presidencial del 20 de octubre para nombrar por cuarta vez consecutiva a Evo Morales. Esto muestra, de entrada, al menos dos cosas: 1) el argumento de los procesos electorales y su potencial de transformación cuando se vinculan a los movimientos sociales; 2) la secuela del progresismo triunfante electoralmente desde 2005, su posterior estrategia de desmovilización, pacificación y revolución pasiva, y el fracaso de esta política cuando Evo Morales más la necesitaba.

Raúl Zibechi resume así el episodio boliviano: “Tras casi catorce años, el gobierno de Evo Morales se desplomó en poco menos de un mes, debido a denuncias masivas de fraude y perpetuación en el poder” (Zibechi, 2020: s. p.). De acuerdo con el autor, los acontecimientos reflejan un problema conocido de arrogancia política y de antidemocracia de la izquierda latinoamericana, como es el caso de Cuba, la época de la dictadura perfecta de México, Venezuela o Argentina. Esta vez, Evo Morales, otrora líder campesino, no logró apelar, frente al ascenso de una derecha racista y oportunista, al apoyo de las organizaciones populares bolivianas, debilitadas tras años de cooptación y represión a manos del oficialismo.⁵ Entre los intentos de restauración y la avanzada golpista, el pueblo boliviano se preparaba, nuevamente, para resistir (pero habría que reconocer el nivel de conciencia de las masas: que son nacionalistas, localistas y populistas).

4 El análisis de las revueltas en Bolivia, como en los otros casos, se efectuó a partir de un estudio de prensa con varias fuentes, con las que se integró un catálogo de eventos contenciosos siguiendo la metodología de Tilly (2011) y Takeshi Wada (2004, 2019). Aquí solo presentamos algunas pertinentes, por razones de espacio: Redacción BBC News Mundo, (22 de octubre de 2019), “Elecciones en Bolivia: el conteo preliminar sitúa a Evo Morales como virtual ganador sin necesidad de segunda vuelta y en medio de denuncias de fraude”. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50134370>; Redacción BBC News Mundo, (23 de octubre de 2019), “Evo Morales asegura que hay en marcha un golpe de Estado en Bolivia e insta a sus seguidores a ‘defender la democracia’”. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50152905>; Redacción BBC News Mundo, (9 de noviembre de 2019), “Motín de policías en Bolivia: agentes de varias ciudades se declaran en rebeldía contra el gobierno de Morales, quien denuncia un ‘golpe de Estado’”. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50355750>; Redacción Animal Político, (10 de noviembre de 2019), “Evo Morales renuncia forzado por la presión del Ejército de Bolivia; México rechaza la operación militar”. Recuperado de <https://www.animalpolitico.com/2019/11/evo-morales-renuncia-presion-militar/>; Reuters y EFE, (13 de noviembre de 2019), “Jeanine Áñez asumió como presidenta de Bolivia mientras las protestas no cesan”. Recuperado de <https://www.elpais.com.uy/mundo/jeanine-anez-asumio-presidenta-bolivia-protestas-cesan.html>.

5 A estos procesos se refiere precisamente la noción de revolución pasiva.

Desde 2006 hasta ahora, de acuerdo con el académico y analista boliviano Manuel de la Fuente,⁶ se distinguen dos procesos que marcaron el régimen de Evo Morales. El primero es el conflicto con la gran burguesía agroindustrial de Santa Cruz, la región más rica del país. Morales llegó a acuerdos con ella y eso “desnaturalizó” el supuesto carácter anticapitalista del MAS. El segundo, de acuerdo con De la Fuente, es el problema del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), por la imposición de construir una carretera ahí para tener acceso al petróleo y a otras riquezas naturales, así como la autorización a la explotación de hidrocarburos en los parques nacionales. Lo anterior generó una protesta de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB) y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Para el 25 de octubre de 2019, seis ciudades rechazaron la reelección: surgieron protestas callejeras, bloqueos y un paro de actividades. Se constituyó el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), de tendencia derecha, contra el fraude electoral. A partir de entonces se escenificaron choques entre “oficialistas” y “opositores” en Santa Cruz, donde la derecha más conservadora ha sido de las más fuertes del país, y en La Paz, donde los mineros hicieron detonar cartuchos de dinamitas que usaban en su labor para manifestarse y tender barricadas en las calles. Sindicatos de transporte anunciaron el cierre de las fronteras con Chile y Perú. Se efectuó un paro nacional. En los barrios de clase media y alta, en los que había mayoría opositora a Evo Morales, se exacerbó la pugna racial. En Santa Cruz y Potosí negocios y escuelas iniciaron una huelga patronal.

Brotó un líder creado por la derecha, Luis Fernando Camacho, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, con un discurso radical y ultracatólico de claro contenido racista y neocolonial, quien se erigió representante de las clases medias blancas y las élites terratenientes del oriente, la región más rica de Bolivia. Le exigió a Evo Morales renunciar en 48 horas y exhortó a las fuerzas armadas a aliarse con ellos. Llamó a los bolivianos a “paralizar” las instituciones. Él mismo entregó en la casa de gobierno de La Paz una carta de renuncia junto con un ejemplar de la Biblia, que Evo debía firmar.

Seis días después del mitin en Santa Cruz, para el 8 de noviembre, unidades policiales se unieron a las protestas contra Evo; dejaron a las sedes del gobierno y del Legislativo sin protección. Morales denunció entonces un golpe de Estado. Los jefes de las Fuerzas Armadas y de la policía le pidieron renun-

6 En su conferencia magistral, dictada en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz, junio de 2017.

ciar a su cargo. Este momento fue el punto de inflexión del conflicto, pues previamente Morales confiaba en las redes de alianzas con las agrupaciones de derecha de Santa Cruz y su cercanía hasta entonces con Luis Almagro, de la OEA. Se habría equivocado. Para entonces, Morales y García Linera decidieron salir de La Paz.

El problema fue que la movilización popular de apoyo a Evo estuvo raspa-da por las fricciones con su gobierno. Un manifiesto de la nación Qhara fue sintomático de estas tensiones, en este se explica el hecho de que organizaciones populares antes aliadas al presidente se hubieran sumado en 2019 a la protesta contra la reelección por un cuarto periodo de Evo Morales:

Señor presidente, desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos: ¿dónde te perdiste? Porque no vives dentro de los preceptos ancestrales que dicen que debemos respetar el muyu (círculo): sólo una vez debemos gobernar. ¿Por qué has prostituido a nuestra Pachamama? ¿Por qué mandaste a quemar la Chiquitania? ¿Por qué maltrataste a nuestros hermanos indígenas en Chaparina y en Tariquía?” (cfr. Zibeche, 2020: s. p.).

Para Zibeche, este manifiesto fue una de las muestras más contundentes contra Evo Morales, ya que provenía de las propias entrañas de la fuerza social que lo llevó al poder. Para entonces, la senadora opositora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado e integrante del partido derechista Movimiento Demócrata Social, asumiría unilateralmente la presidencia de Bolivia, a pesar de que no había el quórum necesario en la asamblea legislativa, pues todo el MAS había abandonado la sesión. El 12 de noviembre, al entrar al Palacio Nacional de Gobierno de Bolivia, Jeanine habría exclamado: “La Biblia vuelve al Palacio”. Jair Bolsonaro se apresuró a reconocerla como presidenta de Bolivia. El nuevo gobierno surgido de un flagrante golpe de Estado afirmaba que atrás de las movilizaciones populares había “grupos subversivos armados”. Jeanine entonces autorizó a los militares restablecer el orden con todos los medios disponibles, eximiéndolos de responsabilidad penal (según opositores, esto era dar “licencia para matar” a ciudadanos). Le daría al Ejército cinco millones de dólares extra en agradecimiento. Para el 20 de noviembre, un mes después del día electoral, ya sumaban 32 muertos y 400 heridos.

Con todo, muchas organizaciones sindicales e indígenas siguieron apoyando a Evo: manifestaciones enarbolando la whipala, bandera multicolor que simbolizaba la multiculturalidad y al Estado plurinacional de Bolivia. Los indígenas corrían con la consigna “ahora sí, guerra civil”. Bloquearon carreteras y generaron desabasto en alimentos básicos y combustible para presionar al

gobierno de La Paz. Las mujeres (un sector fundamental en estas movilizaciones) expresaron una doble indignación: contra el fraude de Morales y contra la derecha racista (Zibechi, 2020).

Como dice Silvia Rivera Cusicanqui (2019: s. p.): “una cosa es reconocer las fallas del gobierno de Evo Morales y otra es desconocer que efectivamente el MAS tiene un electorado y que ha tenido un papel simbólico muy importante por la dignificación de lo indígena”. Lamentablemente, se perdieron muchos años en esta disputa por el control corporativo de los movimientos y las organizaciones sociales, lo que los dejó fuera de combate en un momento en que la derecha levantaba cabeza y el Ejército siguió intacto con todos sus negocios y todas sus empresas dolosas y corruptas.

CONSIDERACIONES FINALES

En esta narrativa de las revueltas de 2019 se enmarca un ciclo de protestas y marcos de interpretación que se extendieron y vivieron en toda la América Latina y en otros lugares del mundo. Algunos ejemplos pueden añadirse a esta intensificación de las movilizaciones, que constituyeron un periodo de protestas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

Así, para el 1 de diciembre de 2019, varios grupos de emigrantes latinos en Australia dieron inicio al “cacerolazo latinoamericano” por los derechos humanos. Ya en Colombia, hacia el 27 de noviembre, las calles se habían volcado contra el presidente Iván Duque Márquez, proveniente del ala derecha neoliberal. A una convocatoria de la central de trabajadores, el gobierno respondió con las Fuerzas Armadas, decretando toques de queda que llevaron a más de 10 días de tensión en todo el país. Lo anterior sucedía mientras que en Chile, Ecuador y Bolivia se vivían momentos de gran agitación social.

Al otro lado del Atlántico, en Francia, el jueves 5 de diciembre empezaron la lucha contra la contrarreforma jubilatoria que había impuesto el gobierno francés. Miles de escuelas y colegios cerraron, había universidades ocupadas o bloqueadas, bomberos pararon, trabajadores de hospitales, ferroviarios, del transporte, de las refinерías, policías, estudiantes, recolectores de residuos, profesores, empleados de empresas privadas en las que estallar a huelga era mucho más difícil debido a la precariedad y al gran número de contrataciones temporales y eventuales. En París, la protesta fue histórica, con cerca de 500 mil manifestantes.

En Argentina, el domingo 27 de octubre se reeligió a un gobierno de tradición peronista-alfonsinista-kirchnerista. En la toma de posesión, el nuevo presidente Alberto Fernández -con la presencia de su nueva vicepresidenta Cristina

Fernández de Kirchner– destacó en su discurso, distinguiéndose del gobierno del derechista millonario Mauricio Macri, que el nuevo gobierno se centraría en la justicia social, la seguridad sin violencia y la lucha contra la violencia de género (Touriño Brecha, 2019). Regresaba el progresismo a Argentina.

En Chile, Hong Kong, Ecuador, Argelia, Bolivia, Líbano, Colombia o Francia, cientos de ciudadanos llenos de rabia y aparentemente sin líderes salieron a las calles en 2019. Desde la primavera árabe, los indignados, los Occupy Wall Street, los secundarios chilenos de 2010 y 2011, hasta las revoluciones de los zánganos y de los 30 pesos en 2019, se creó un ciclo de protestas en medio de un creciente posicionamiento político de la ultraderecha en el mundo.

Maquillados como el protagonista del filme “Joker”, un personaje que vive en la marginación, o con la máscara de “V de vendetta”, miles de personas denunciaron problemas parecidos en Bagdad, Beirut (contra el alza en las llamadas de WhatsApp) o en La Paz, desencadenando la caída de cinco jefes de Estado o de gobierno. Es “una revolución contra el TINA”, acrónimo de “There is no alternative” (No hay alternativa), repetido por la exprimera ministra Margaret Thatcher para justificar la imposición del neoliberalismo a nivel mundial.

El año 2019, estima Olivier Fillieule, “no es inédito ni excepcional. Recordemos que a fines de 2011 la revista *Time* elegía a ‘el manifestante’ como personalidad del año” (en AFP, 2019: párr. 16). No es insólito, pero refleja claramente una extensión y profundización de la protesta.

SON REVUELTAS POR LA DIGNIDAD

La pregunta que nos hicimos para pensar en la trayectoria de las revueltas de 2019 fue si los movimientos sociales institucionalizan y estabilizan al sistema, o si son necesarios para generar cambios significativos.

En el caso de Bolivia puse énfasis en el papel de las elecciones en los procesos de movilización social. Interesa destacar un caso claro de revolución pasiva, utilizada por el régimen de Evo Morales para contener y desmovilizar los movimientos a favor de su política extractivista, que se revirtió en su intento por repetir su cuarta presidencia. Conviene hablar de las formaciones de derecha y ultraderecha que se han extendido en toda la región y que constituyen verdaderos contramovimientos ante el populismo en la zona, no solo en Bolivia, sino en Ecuador, Chile, Colombia, El Salvador y México.

En el caso de Ecuador, por un lado subrayé la injerencia del gobierno de los Estados Unidos (que se repite con claridad en los otros), y por otro, resalté los límites del movimiento que redujeron en parte su capacidad para construir una mejor coordinación de las organizaciones y la relativa imposibilidad de

revertir el sectarismo de las luchas locales para convertirse en movimientos amplios de gran espectro; así, un tema que surgió en el seno del conflicto, acerca de la ética de la violencia y no-violencia en los movimientos sociales debido a la radicalización de algunos sectores, se puso en la mesa del debate.

En lo que respecta a Chile, señalé la importancia de las y los estudiantes, su rasgo distintivo de planear acciones bien organizadas, como la formación de los escuderos y las primeras y segundas líneas de avanzada en las manifestaciones. Me interesó destacar el paso de una lucha aparentemente parcial contra el alza del transporte a la construcción de un gran movimiento nacional por una nueva Constitución (intento similar al caso de Ecuador con el Parlamento Popular). Surgieron lo que se han llamado espacios de ciudadanía en conflicto.

Las acciones de las revueltas deben hacernos reflexionar acerca de la existencia de una nueva cultura política de la disidencia. Una cultura surgida de la experiencia de los movimientos sociales, que actúa localmente, pero que se fuerza a pensar globalmente, de la vivencia inédita de las mujeres y el feminismo de hoy y su lucha contra el sistema patriarcal, porque eso significa un posible resquebrajamiento paulatino del sistema de dominación. Y así, de la necesaria unidad de trabajadores e indígenas, mujeres y jóvenes que se instauraron en la vanguardia del cambio político; es decir, se constituyeron en sujeto social, en Bolivia, Ecuador, Chile, México y otras partes del mundo.

Cuando puntualizamos a ciertos autores referentes que vinculan movimientos sociales y procesos políticos, tales como Tilly, Tarrow, Wallerstein, Laclau, Modonesi y Zibechi, fue porque quisimos hacer énfasis en el paso gradual de lo social a lo político, de las masas que surgen organizadas en revueltas y construyen movimientos sociales para el cambio político. Asimismo, porque pueden ayudarnos a responder si los movimientos institucionalizan o provocan una transformación. En efecto, las luchas pueden situarse en el espectro de los movimientos antisistémicos o surgir en el ámbito de la subalternidad y avanzar en la lucha antagonista; pueden romper las restricciones localistas y espontáneas para convertirse en movimientos de representación universal y avanzar en la utopía del cambio. Eso puede señalarse como intenciones para los casos ecuatoriano, chileno y boliviano, como muchos otros, a pesar de sus límites. Encontrar la explicación del desequilibrio existente entre cambio e institucionalización en los movimientos sociales es pertinente para futuros análisis. Esta, que ha sido nada más que una descripción de los eventos de 2019, puede sin embargo apostar a nuevas líneas de reflexión e investigación, pero sobre todo ayudar a la crítica desde el activismo y los espacios de experiencia militante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AFP (2019). *Las protestas en el mundo 2019*. Recuperado de <https://www.fortuneenespanol.com/destacado/protestas-mundo-2019/>
- Anderson, Perry (1978). *Las antinomias de Antonio Gramsci: Estado y Revolución en occidente*. Barcelona: Fontamara.
- Beck, Ulrich (2011a). Teoría de la sociedad del riesgo. En Josetxo Beriain (comp.), (1996 [2011]), *Las consecuencias perversas de la modernidad: A. Giddens, Z. Bauman, N. Luhmann, U. Beck* (pp. 201-222). Barcelona: Antrhopos.
- Beck, Ulrich (2011b). Teoría de la modernización reflexiva. En Josetxo Beriain (comp.), (1996 [2011]), *Las consecuencias perversas de la modernidad: A. Giddens, Z. Bauman, N. Luhmann, U. Beck* (pp. 223-265). Barcelona: Antrhopos.
- Betancourt, Carlos Emilio (1990). Gramsci y el concepto del bloque histórico. *Revista Historia Crítica*, 4.
- Gaudichaud, Franck, Webber, Jeffery y Modonesi, Massimo (2019). *Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de interpretación histórica*. México: FCPyS-UNAM.
- Gramsci, Antonio (2009). *La política y el Estado moderno*. Barcelona: PC Biblioteca Pensamiento Crítico.
- Harvey, David (2006). La acumulación por desposesión. En C. Bueno y M. Pérez Negrete (coords.), *Espacios globales* (pp. 21-52) México: Universidad Iberoamericana y Plaza y Valdés.
- Laclau, Ernesto (2003). Identidad y Hegemonía: el rol de la universalidad en la construcción de lógicas políticas. En J. Butler, E. Laclau, S. Žizek, *Contingencia, Hegemonía, Universalidad. Diálogos Contemporáneos en la Izquierda* (pp. 49-94). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Marx, Karl (1979). *Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850*. Moscú: Editorial Progreso.
- Modonesi, Massimo (2016). *El Principio antagonista, marxismo y acción política*. México: UNAM.
- Modonesi, Massimo (2017). *Revoluciones pasivas*. México: Ítaca, UAM-A, RED de Estudios de los Movimientos Sociales A.C., Conacyt.
- Nogueira, Marco Aurelio (2004). La sociedad civil como campo de luchas, como recurso gerencial y como espacio ético. En D. Kanoussi (comp.), *Gramsci en Río de Janeiro* (pp. 233-260). México: BUAP, Antonio Gramsci A.C., Plaza y Valdés editores.
- Pineda, Javier (2020). ¿Cómo seguimos en la disputa por una Asamblea Constituyente Soberana, Plurinacional y Paritaria? *Convergencia medios*. Recuperado de <https://www.convergenciamedios.cl/2020/01/como-seguimos-en-la-disputa-por-una-asamblea-constituyente-soberana-plurinacional-y-paritaria/>
- Portelli, Hugues (1992). *Gramsci y el bloque histórico*. México: Siglo XXI.
- Rivera Cusicanqui, Silvia (20 de noviembre de 2019). Un largo proceso de degradación. *Contexto y acción*. Recuperado de <https://ctxt.es/es/20191120/Firmas/29639/bolivia-movimiento-indigena-cocaleros-tipnis-chiquitania-silvia-rivera-cusicanqui.htm>
- Svampa, Maristella (2019). *Las fronteras del neextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, fero ecoterritorial y nuevas dependencias*. Bielefeld, Alemania: Transcript Verlag, Bielefeld University Press.
- Tarrow, Sydney (1998). *Power in Movement, social movements and contentious politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles (1995). Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas. *Sociológica*, 10(8), 13-36.
- Tilly, Charles (2006). *Regimes and Repertoires* (pp. 30-59). Chicago: The University of Chicago Press.

- Tilly, Charles (2008). *Contentious Performances*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles (2011). Describiendo, midiendo y explicando la lucha. En J. Auyero y R. Hobert (comps.), *Acción e interpretación en la sociología cualitativa norteamericana* (pp. 13-38). La Plata: Flacso, Ediciones EPC.
- Trotsky, Leon (1987). *The History of the Russian Revolution*. New York: Pathfinder Press.
- Touriño B., Rosario (2019). El “nuevo estilo progresista” del Gobierno Fernández. *Brecha*, 13-12-2019. Recuperado de <https://correspondenciadeprensa.com/?p=9954>
- Wada, Takeshi (2004). Event Analysis of Claim Making in Mexico: How are Social Protests Transformed into Political Protests? Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Hilton San Francisco & Renaissance Parc 55 Hotel, San Francisco, CA. Recuperado de http://www.allacademic.com/meta/p110810_index.html
- Wada, Takeshi (2019). Event analysis: cambios históricos de los patrones de la protesta popular en México 1964-2000. En I. Navarro y S. Tamayo (coords.), *Movimientos sociales en México en el siglo XXI* (pp.43-66). México: Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales A.C.
- Wallerstein, Immanuel (1996). *Después del liberalismo*. México: UNAM y Siglo XXI.
- Zibechi, Raúl (2020). Evo perdió a Evo. *Desinformemonos.org*. Recuperado de <https://desinformemonos.org/evo-perdio-a-evo/>

Fecha de recepción: 25 de agosto 2021

Fecha de aceptación: 11 de mayo 2022